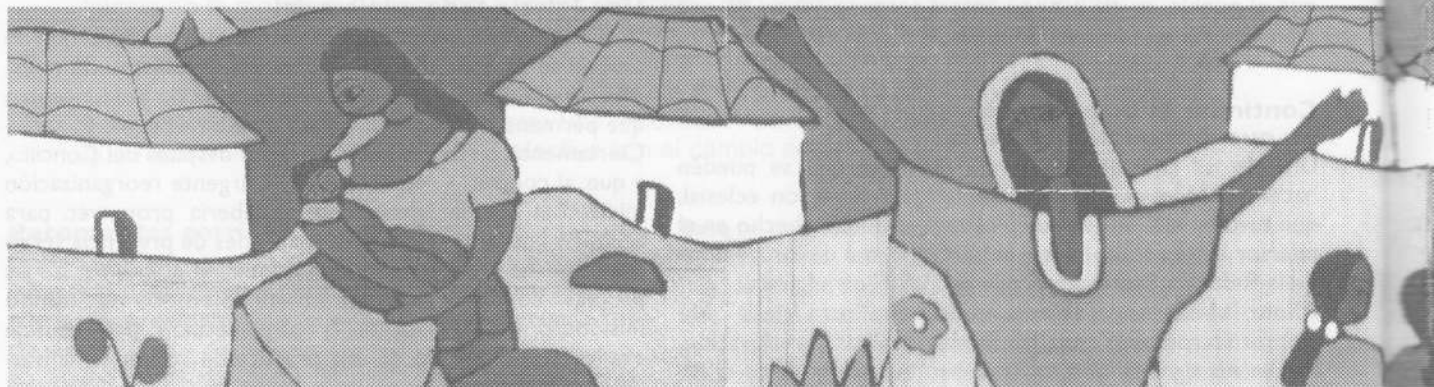


En la tierra hemos nacido, vivido y en ella moriremos



La situación de los campesinos de Córdoba es sumamente conflictiva. A los problemas de escasez de agua, aislamiento, ausencia de políticas de apoyo, irresueltos hace años, se suman los desalojos a los legítimos poseedores y trabajadores de la tierra. La justicia y la policía han tomado una postura clara en este tema: En los últimos meses llevan cuarenta y seis imputados en casos de defensa de los campos, y los tribunales no le dan lugar a ninguna de las denuncias que presentan los campesinos contra los empresarios usurpadores.

Para denunciar estos abusos han realizado marchas a los tribunales que imputan a los campesinos, los de Cruz del Eje, de Villa Dolores y de Deán Funes. En la primera, a Cruz del Eje el 4 de marzo, Joaquín González, abogado del Movimiento Campesino de Córdoba, fue detenido y golpeado por la Policía mientras intentaba ingresar a los Tribunales con su credencial profesional.

Carlos Julio Sánchez, párroco de Serrezuela y amigo del Centro Tiempo Latinoamericano, junto a once campesinos, fue imputado por daño calificado, por cortar el alambrado de campos ubicados en el paraje Cañada Larga, como "acto posesorio ante la agresión de un empresario de afuera que usurpó un campo que pertenece a cuatro familias (que tienen la posesión desde hace más de un siglo) y lo alambró sin que nadie se lo impidiera", explicó a un diario local.

El obispo Omar Félix Colomé, titular de la diócesis de Cruz del Eje, Minas, Pocho, San Alberto, San Javier y norte de Punilla, expresó su apoyo al párroco y a los campesinos, porque consideró que la Iglesia debía estar junto a sus sacerdotes y a sus fieles, ya que muchos campesinos se reconocen como católicos.

Respecto al problema de la titularidad registral de la tierra, el Gobierno Provincial sancionó la Ley 9150, y

publicó un programa llamado "Tierra para el Futuro" (no dice de quién). La Ley propone que los jefes comunales y los intendentes sean los que determinen ante el registro quiénes son los poseedores de la tierra para "agilizar" el trámite, ya que Catastro no tiene datos y los técnicos de los que habla la Ley no van a terreno. En lugar de conformar consejos participativos con actores locales para la determinación de la posesión, el gobierno encargó esta tarea a los jefes comunales. Por muchos motivos, el Movimiento Campesino de Córdoba considera que la Ley es inútil y demuestra la falta de voluntad política del Gobierno para resolver genuinamente el problema. En primer lugar, porque la posesión es un hecho, y la Ley no le agrega nada al derecho que la misma posesión confiere, por tanto es una Ley con evidente espíritu recaudatorio. Además, no es de Aplicación en caso de judicialización; por lo que los empresarios lo primero que hacen es judicializar. En cambio, si los campesinos quieren beneficiarse con la Ley, deben presentar un formulario, cumpliendo ciertos requisitos formales, que resultan incumplibles para los campesinos. De hecho, de 193 registros presentados desde el Movimiento, no hubo ni una mensura ni respuesta alguna como resultado.

Al respecto, el Movimiento Campesino de Córdoba realizó un comunicado a principios de marzo, sobre la situación del conflicto por la tierra, que compartimos a continuación.

NI UN METRO MÁS, LA TIERRA ES NUESTRA

Somos familias campesinas que desde hace cuatro años venimos organizándonos en torno a los problemas de tierra y agua por los que atravesamos los que, desde hace cientos de años, habitamos nuestro monte, nuestro campo.

DOROTHY STANG, mártir de la lucha campesina.


La hermana Dorothy Stang, que desde hacía 20 años integraba la Comisión Pastoral de la Tierra, fue asesinada a balazos en el estado de Pará, al norte de Brasil, el 12 de febrero de este año. La religiosa norteamericana brasilera, estaba comprometida en la lucha por la tierra y recibía amenazas de muerte desde 1999, año en que comenzó a organizar un Proyecto de Desarrollo Sustentable, que beneficia hoy a 600 familias del Amazonas.

En el momento del asesinato, la hermana Dorothy se encontraba en el asentamiento Esperanza, discutiendo sobre la situación de violencia y la constante invasión por parte de los pistoleros a los asentamientos.

En febrero del año pasado, la hermana fue acusada de formar una cuadrilla, en un proceso en el que cuatro trabajadores rurales fueron detenidos arbitrariamente.

Estuvieron en su funeral varios ministros, y el propio presidente Lula pidió se siguiera de cerca la investigación. Por su parte, la Comisión Pastoral de la Tierra requiere que el caso sea tratado por la Justicia Federal, ya que existe un extenso rosario de setecientos setenta crímenes impunes cometidos contra dirigentes sindicales, trabajadores sin tierra, religiosos, abogados, entre otros, en Pará, a lo largo de más de 30 años de lucha por la reforma agraria.

Dorothy es considerada una mártir más de la Pastoral de la Tierra, que "ha acompañado con firmeza y pasión, la vida y la lucha de los trabajadores del campo", denunciando a madereros y latifundistas. Dom Demétrio Valentini, obispo de Jales, San Pablo, expresó en una nota: "Su muerte denuncia ante Brasil y el mundo la absurda estructura rural de concentración de la tierra en grandes propiedades al lado de millones de familias que buscan, sin conseguirlo, un pequeño terreno que les sirva de abrigo y sustento.(...) Hacendados, madereros y plantadores de soja, bajo el discurso de la productividad, avanzan sobre tierras públicas, ocupadas por poblaciones tradicionales, promueven la devastación de las tierras y la selva, y la polución de las aguas, usando para eso, con apoyo político y policial del gobierno del estado, muchas formas de violencia, que van desde la intimidación, pasando por el trabajo esclavo, al asesinato.(...) El testimonio de la hermana Dorothy exige que la Reforma Agraria se torne, efectivamente, una acción prioritaria del Gobierno Federal, sin miedo de expropiar el latifundio, y con un apoyo financiero no menor al que se brinda pródigamente al agronegocio".



En los últimos años estos problemas se agravaron por el avance de la frontera agrícola (que en nuestra región se trata del avance del cultivo de papa y de soja), que ha provocado el desalojo de familias campesinas de sus tierras, como así también la imputación de campesinos por defender la tierra en la que viven desde hace muchísimos años.

Apoyamos y creemos en la organización, en la expresión organizada de la voz de los sin voz, de quienes recibimos las consecuencias de decisiones políticas que parecen no tener en cuenta la producción campesina. Estamos convencidos de que el camino es organizarse para enfrentar esta situación (que ya lleva miles de familias expulsadas de su tierra por falta de seguridad en la tenencia, falta de acceso a la salud, a la educación, a una comercialización justa de lo que se produce, etc.) y para instalar en la opinión pública una discusión que nos lleve a definir qué tipo de desarrollo pretendemos para la región, defendiendo la producción campesina, que desde hace siglos viene demostrando, en la práctica, su sustentabilidad, en contraposición a la producción empresaria, que va dejando desierto y pobreza a su paso.

Por eso las Comunidades Campesinas Organizadas en la Unión Campesina de Traslasierra (UCATRAS) y en el Movimiento Campesino de Córdoba (APENOC, OCUNC, OTRABU, UCATRAS, OCAPPA, UCAN, Paravachasca), decimos "Ni un metro más, la tierra es nuestra", y exigimos una urgente solución a los ancestrales problemas de tierra y agua de las comunidades campesinas de nuestra región, de todo el Norte, Noroeste y Oeste de la provincia. También exigimos el cese inmediato de los desmontes ilegales en la región, a cargo de productores empresarios.

Fuentes: UCATRAS – Movimiento Campesino de Córdoba
Comunicador@s Solidari@s

Fuente: Adital